



Proceso	Divisorio
Demandante	The Labs S.A.
Demandado	Medicamentos Pos SAS Dempos
Radicado	05266 31 03 003 2022 00138 01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado 3º Civil del Circuito de Envigado
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 009
Decisión	Revoca
Tema	La factura electrónica como título valor. Presunción de autenticidad. No requiere certificación de autenticidad.

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL

Medellín (Ant.), diez de febrero de dos mil veintitrés

I. OBJETO

Se procede a decidir el recurso de apelación interpuesto en subsidio del de reposición, contra el auto proferido el 17 de junio de 2022, por el **JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO (ANT.)**, negando el

mandamiento ejecutivo solicitado por **THE LABS S. A.** en contra de **MEDICAMENTOS POS S.A.S. DEMPOS**, con soporte en las facturas electrónicas aportadas.

II. ANTECEDENTES

Para negar la orden de pago, el Juzgado considera que como las facturas electrónicas fueron expedidas a partir del mes de agosto de 2021, le son aplicables los decretos 2242 de 2015 y 1154 de 2020 y demás normas complementarias; así mismo, el art. 774 del C. de Comercio, modificado por el art. 3° de la Ley 1231 de 2008; señala que, a más de los requisitos señalados en este dispositivo, debe cumplir con los dispuestos en el 621 ibídem y 617 del Estatuto Tributario y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Al efecto, el art. 621 consagra como requisito "*La firma de quien lo crea*" y, tratándose de la firma digital, el numeral 2° del art. 28 de la ley 527 de 1999, establece que debe ser verificada mediante in certificación contentiva de los requisitos del art. 35 ibídem y, como en este caso, no se aportó esa certificación los documentos aportados no tienen el carácter de título valor.

Oportunamente, la parte demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio, el de apelación contra esta decisión, con soporte en los siguientes argumentos: El juzgado se equivocó al señalar que la firma digital debe ser verificada mediante la certificación contenida en los requisitos del art. 35 de la Ley 527 de 1999 y al exigir dicho certificado para verificar la autenticidad de la firma digital está creando un

requisito. En este estadio del proceso la certificación no es exigible como presupuesto de existencia del título ejecutivo; en este sentido, el art. 28 de la Ley 527 de 1999, señala como atributo de la firma digital que sea *"susceptible de ser verificada"*; es decir, que sea verificable, pero no que sea efectivamente verificada so pena de desconocer la autenticidad. El certificado del art. 35 referido, permite verificar la autenticidad de la firma digital, en el evento de que sea cuestionada o de tacha de falsedad; exigir la verificación de la firma digital sin que nadie haya cuestionado su autenticidad, sería como exigir que con toda firma manuscrita se aporte un dictamen grafológico. *"Ni la firma digital ni el certificado exigido por el despacho como una especie de presupuesto de autenticidad de aquella, son documentos de fácil lectura humana. Uno y otro son mensajes de datos (at. 3 Decreto 333 de 2014), que contienen valores numéricos y códigos en lenguajes de programación, diseñados para ser leídos y procesados por sistemas de cómputo, o por experto en la materia"*.

En esencia, indica: *"En otros términos, al negarle el carácter de título valor a las facturas electrónicas aportadas, el Despacho está (i) creando una exigencia que no se desprende del art. 28 de la Ley 527 de 1999 y que deja sin efectos la presunción de autenticidad de documentos del Código General del Proceso; (ii) creando una exigencia improductiva en esta etapa del proceso, pues la firma digital y la firma electrónica constituyen mensajes de datos compuestos por valores numéricos y líneas de código inentendibles para un juez o un abogado; y (iii) echando de menos información de la firma digital que, además de que no está diseñada para lectura*

humana, ya se encuentra en los archivos XML aportados y fue previamente validada por la DIAN”.

Finalmente, cita una providencia del Tribunal en la que se aparta de los argumentos que soporta el auto recurrido e indica que el Despacho debió analizar cada uno de los documentos que acompañan la demanda, con el fin de determinar el mérito ejecutivo individual y conjuntamente considerados, para proceder a libar mandamiento de pago frente a las 26 obligaciones expresas, claras y exigibles como se solicita en la demanda.

Por auto proferido el once (11) de julio pasado, el juzgado negó el recurso de reposición y, subsidiariamente concedió el de apelación.

Como soporte para la decisión indica que el art. 3° del Decreto 2242 de 2015, establece las condiciones de expedición de la factura electrónica, discriminándolas en condiciones para su generación y para su entrega; además de estos requisitos, debe cumplir con los generales del art. 621 del Estatuto Mercantil y los del art. 617 del Estatuto Tributario.

En consideración a lo expuesto, se establece que las facturas allegadas no tienen el carácter de títulos valores y no pueden ser empleadas para impetrar la acción cambiaria, sin que esta circunstancia afecte el negocio jurídico que las originó.

Luego, el recurrente adicionó los argumentos para que sean tenidos en cuenta en segunda instancia, indicando: Cada una de las obligaciones objeto de este proceso, constan en forma clara y expresa en varios documentos que provienen de la ejecutada y constituyen plena prueba en su contra, o bien son títulos valores; el despacho se ha limitado a estudiar de manera equivocada el mérito ejecutivo de las facturas electrónicas como títulos ejecutivos, ignorando todos los demás documentos aportados; en relación a las facturas electrónicas el despacho creó exigencias extralegales inútiles y redundantes de cara al contenido de los archivos XML, contentivos de las facturas electrónicas aportadas con la demanda, las que constituyen título valor y prestan mérito ejecutivo, por las razones que ha expuesto; igualmente, enfatiza que a lo largo de la demanda y particularmente en los fundamentos de derecho, advirtió que cada una de las obligaciones reclamadas constaba en varios documentos que prestaban mérito ejecutivo y no simplemente en las facturas electrónicas a las que el Despacho limitó su esquivado análisis, como así lo sintetizó en el hecho 167, al advertir: *"fueron instrumentadas de forma clara y expresa en los siguientes documentos: (i) las órdenes de compra remitidas a THE LABS, documentos provenientes del dominio de correo electrónico corporativo de DEMPOS y que constituyen plena prueba contra esta sociedad; (ii) las facturas electrónicas que THE LABS libró y entregó a DEMPOS , sin que ésta objetara oportunamente su contenido; y (iii) el correo electrónico proveniente del dominio de correo electrónico corporativo de DEMPOS, en el que reconoció inequívocamente la cuantía, fecha de vencimiento y estado de mora de dichas obligaciones"*.

III. CONSIDERACIONES

Problemas jurídicos: En esencia el recurso de apelación de cara la decisión de primer grado, plantea los siguientes problemas jurídicos que la Sala debe resolver: i) ¿Se puede exigir certificación sobre la autenticidad de la firma digital en la factura electrónica? ¿Se tenía que examinar si los documentos aportados constituyen título ejecutivo de las obligaciones pretendidas?

Sobre la factura electrónica como título valor, el Tribunal de Bogotá D. C. ha precisado: *"a. En lo que atañe a su creación, dos (2) aspectos -de varios- merece escrutinio: el primero apunta a que las personas obligadas a expedirla, generarla y entregarla, bien porque se les impuso esa modalidad u optaron por emplearla, deben entregarle al adquirente una representación gráfica de la factura, en forma impreso o en formato digital, caso en el cual tienen que enviársela al correo o dirección electrónica que les hubieren indicado, o ponerla a disposición en el sitio electrónico del vendedor o prestador del servicio (dec. 1625(2016, art. 1.6.1.4.1.3, par. 1).*

"El segundo concierne a la firma, pues aunque electrónica, la factura debe cumplir con la exigencia prevista en el artículo 625 del estatuto mercantil, habida cuenta que, como se sabe, toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una signatura puesta en el título-valor, razón por la cual el artículo 1.6.1.4.1.3 del Decreto 1625 de 2016 previó que ella podía ser digital, según lo previsto en la Ley 527 de 1999, o

electrónica conforme al Decreto 1070 de 2015, de manera que se garanticen la autenticidad e integridad del documento.

"En este punto es útil recordar que la firma digital es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación", mientras que la firma electrónica responde a "Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pendiente".

"b. En lo que respecta a la aceptación, el decreto 1074 de 2015 -adicionado por el Decreto 1349 de 2016- señaló que, al igual que una factura física, la electrónica podía ser aceptada expresa o tácitamente. En el primer caso, el adquirente o pagador del respectivo producto puede hacerlo por medio electrónico, mientras que el segundo evento sólo puede tener lugar cuando el destinatario de un lado, pueda expedir o recibir la factura electrónicamente, y del otro, "no reclamase en contra de su contenido ... dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica", evento en el que el emisor podrá remitir electrónicamente el título al registro para su "recepción, custodia, validación e

inscripción de la información de la factura electrónica como título-valor ...” (dec. 1349/16, art. 2.2.2.53.6, inc. 2.).

*“c) Para el ejercicio de las acciones cambiarias, fue previsto en el Decreto 1349 de 2016, artículo 2.2.2.53.13 que por tratarse de un mensaje de datos, el emisor o tenedor legítimo de la factura -que necesariamente, de haber circulado, es el endosatario que aparezca inscrito-, tiene derecho a solicitar del “registro” o “plataforma electrónica que permite el registro de facturas electrónicas”, la expedición de un **“título de cobro”** (se resalta), que “es la representación documental (no negociable) de la factura electrónica como título-valor” (art. 2.2.2.53.2, num. 15, ib.), el cual “contendrá la información de las personas que ... se obligaron al pago de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Comercio” (art. 2.2.2.53.13, ib.), y tener un número único e irrepetible de identificación (art. 2.2.2.53.13, inc. 4. Ib.). Más aún, los jueces están autorizados para solicitar al registro un certificado que permita verificar la autenticidad de ese documento.*

“Quiere ello decir que, en estrictez, la acción cambiaria no se ejerce con la factura electrónica en si misma considerada, sino con el título de cobro que expide el registro. Que las cosas son de esa manera lo confirma el inciso 5º del artículo 2.2.2.53.13 del mencionado Decreto, en el que se precisa que, “ante el incumplimiento de la obligación de pago por parte del adquirente/pagador, el emisor de la factura electrónica como título-valor que no la hubiese inscrito en el registro para permitir su circulación, podrá inscribirla en el mismo con el objeto de solicitar la expedición de un título de

cobro que, temiendo el carácter de título ejecutivo, le permita hacer efectivo su derecho a acudir a su ejecución ante la jurisdicción a través de las acciones cambiarias incorporadas en el título-valor electrónico” (Sala Civil – Tribunal de Bogotá; proceso ejecutivo de Activos S.A.S. contra Supernet TV Telecomunicaciones S.A.S., auto del 3 de septiembre de 2019).

La factura electrónica es un documento en los términos del art. 243 del C. General del Proceso, lo que permite colegir que para su valoración probatoria se siguen las reglas previstas para esta clase de pruebas; para cuyo efecto, es menester determinar si para su elaboración se cumplió con los requisitos legalmente previstos.

Los títulos valores llevan incita la presunción de autenticidad, y por provenir de la parte demandada, la reitera el inciso 2º del art. 244 de la mencionada codificación, al disponer: “*Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso*”.

Lo primero que se debe verificar es si la factura fue expedida por el competente registro, para cuyo cometido se tiene que inscribir previamente, de haberse cumplido con este requisito esta revestida de la presunción de autenticidad, sin que se requiera certificaciones para acreditar su autenticidad o la de las firmas digitales o electrónicas; ahora, si el juez lo considera necesario, para tales efectos puede solicitar

certificación en el registro, bien porque que el documento fue impugnado, como ocurre cuando es desconocido y/o tachado de falso, o por cualquier otra razón.

De lo anterior se colige que no le asiste razón al Juzgado al exigir una certificación de autenticidad de la factura electrónica – firma digital, lo que impone la revocatoria del auto recurrido.

En cuanto a que se determine si las facturas electrónicas constituyen títulos ejecutivos, si fuere el caso, con los demás documentos aportados con la demanda; como en efecto, así se indica en la demanda; advierte el Tribunal que así se debe proceder porque así se indica en la demanda; en el evento de que no sean título valor.

Para estos menesteres, se ordenará la devolución del expediente para que determine la idoneidad de la demanda, con la precisión que no puede volver sobre el reparo formulado y decidido apelación; pues dado, que los documentos allegados como base de recaudo ejecutivo pueden adolecer de otras deficiencias diferentes a la que fue objeto de reparo o incluso, la demanda no ser idónea, la primera instancia debe tomar las medidas pertinentes, lo que puede dar lugar a providencias susceptibles del recurso de apelación; en cuyo caso, el Tribunal no se debe pronunciar porque se pretermittiría la primera instancia.

Por lo dicho se revoca el auto de primer grado y se ordena la devolución del expediente para los fines indicados.

IV. RESOLUCION

A mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Civil,

R E S U E L V E

- 1.** Por las razones indicadas, revocar el auto de fecha y procedencias indicadas.
- 2.** Se ordena devolver la actuación al juzgado de origen, para cuyo efecto, se debe tener en cuenta lo indicado.

COPIESE Y NOTIFIQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARIN
MAGISTRADO